

Nueva Sociedad Separatas

Fernando Calderón
Deliberación y violencia

Texto aparecido en

Fernando Calderón: *La reforma de la política. Deliberación y desarrollo.*
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales - ILDIS /
Friedrich Ebert Stiftung - FES (Bolivia) / Nueva Sociedad, Caracas,
2002, pp 137-155.

Capítulo 6 Deliberación y violencia

La historia política de América Latina durante el siglo xx en buena medida ha sido una historia de violencia. Ha habido algunas guerras entre países vecinos, invasiones de potencias externas, revoluciones, levantamientos, golpes de Estado, dictaduras militares y civiles que marcan y expanden la presencia de una fuerte cultura de negación del otro en todos estos países. Como la gente en *El otoño del patriarca*, los habitantes de la región sufren de “dictadura congénita”, no sólo por la constante violación de los derechos humanos o la violencia cotidiana, sino también de una manera onírica: la gente tiene pesadillas con escenas de violencia y el miedo ha engendrado un fantasma colectivo que habita en el inconsciente de los ciudadanos, un miedo que continúa alimentando una cultura de dolor y de silencio (v. PNUD-Chile 1998).

Si bien en los capítulos anteriores se hizo referencia a la violencia en un sentido amplio, aquí se abordará la violencia política y social en sus formas concretas de funcionamiento. Como afirma el *Informe Mundial de Desarrollo Humano 1994*, los conflictos en la humanidad en esta era empiezan a ser cada vez más al interior de los países y no entre ellos, y la mayoría se produce en los países en desarrollo. Estos enfrentamientos son generalmente por razones culturales, religiosas y étnicas. Quizás no hay otro aspecto de la seguridad humana más importante que la violencia, que ahora asume un rostro cultural. La magnitud de la cultura de la violencia en la humanidad va más allá de la razón. Según datos brindados por PNUD, desde 1945 han muerto más de 20 millones de personas en guerras y conflictos. En 1992 en Estados Unidos fueron reportados por la policía 14 millones de crímenes y en la segunda mitad de los 80 el número de asesinatos se duplicó en Italia y Portugal. Pero la violencia no sólo es callejera o producto de la delincuencia común, sino también una política de Estado. El gasto militar mundial de 1992 fue igual al ingreso combinado de la mitad de la población del mundo: 815.000 millones de dólares. Existen otras formas de violencia, como la carencia de insumos básicos para la salud; más de 1.000 millones de personas de los países en desarrollo carecen de agua para el consumo; lo mismo se puede decir de la disparidad económica, ya que un quinto de la población mundial concentra más de 80% de la actividad económica del planeta (UNDP 1994).

En este contexto de violencia generalizada en la historia de la humanidad, América Latina tiene una tradición fuertemente arraigada de violencia política, económica y social. Basta ver cómo la violencia política llegó al extremo del asesinato entre distintos caudillos de la revolución mexicana, lo que continuó con experiencias trágicas como la muerte de Colosio, candidato presidencial en 1994. A El Salvador y Guatemala, la guerra interna les ha costado miles de muertos; Colombia hoy es la región donde más se concentran las experiencias de violencia cotidiana, con asesinatos diarios fruto de un fuego cruzado en medio del cual se encuentra la población civil. En cuanto a las disparidades sociales, Brasil es uno de los países con mayor concentración de capital económico en muy pocas manos, con diferencias impresionantes entre el nordeste y el sur. Esta situación general trae consigo una desconfianza en las políticas públicas; como lo mostró el *Informe de Desarrollo Humano, Chile 1998*, a pesar de que la economía chilena creció significativamente, se acentuó un sentimiento de inseguridad muy fuerte en la población, caracterizado particularmente por el miedo al otro y la desconfianza frente a lo desconocido (PNUD-Chile 1998).

La violencia, incluso en sus formas más sutiles, ha estado ligada a la política. Vale la pena al menos referirse a dos ejemplos. De una parte, la política orientada hacia los fines últimos, sobredimensionada, como espacio para proyectos fundamentalistas por los cuales podían inmolese las vidas de todos aquellos que, bajo la mirada del “Mesías”, obstruían la “Gran Cruzada” o el “Gran Proyecto Nacional”. La violencia podía justificarse en nombre de la integridad de la nación, la fundación de un nuevo orden o las amenazas internas y externas a la soberanía o a la seguridad nacional. El terrorismo de izquierda o de derecha no ha sido ajeno a estas formas, como se tratará de analizar más adelante. De otra parte, la práctica política en su visión instrumental, donde los medios se subordinan absolutamente a la consecución de fines. El ejemplo más notable es la figura de Fouché en la Revolución Francesa; pero sin lugar a dudas la cultura política latinoamericana, incluso en sus formas más sofisticadas, está plagada de mefistofélicos personajes que disfrazados de múltiples ideologías las instrumentalizan para obtener muy a menudo fines particularistas.

Adicionalmente a un patrón autoritario de larga duración y de origen colonial, el carácter patrimonialista y corporativo del Estado-nación estimuló, durante buena parte del siglo xx, el desarrollo de una cultura de medios que valorizaba más los juegos clientelares que los fines que el mismo Estado se proponía. Así, violencia política y lógica prebendalista

constituyeron rasgos básicos de una política de predominio de los medios sobre los fines en América Latina. En la base de todo esto anclaba una cultura política de carácter populista que concebía al pueblo de manera homogénea como dueño de la verdad, siempre interpretada por líderes mesiánicos que hablaban del sentido de la historia asociado indisolublemente con sus vidas personales. Como ya se mencionó, es posible afirmar que las relaciones sociales latinoamericanas se construyeron en torno de redes prebendales, clientelistas y de compadrazgo. En ellas se desarrolló un amplio espíritu de solidaridad interna y un sentimiento fuerte de desconfianza hacia otras redes, con las cuales competían usando todos los medios posibles. Un factor adicional es que en estas redes se daba, muy a menudo, un proceso de faccionalismo que tendía a debilitarlas. Asimismo, a partir de dichas redes se estructuraban prácticas y organizaciones políticas y corporativas que marcaron la vida política latinoamericana. Así, solidaridad y faccionalismo son las dos caras de una misma moneda cultural que impregna la vida política de este continente. A comienzos del siglo xx, América Latina creó una cultura de la violencia que se alimentó del mercader y del soldado, ambos compadres y muy frecuentemente muy racionales en el logro de sus objetivos.

El predominio de la violencia puede entenderse desde este carácter instrumental de la política, que en realidad expresa la ausencia de una cultura institucionalizada y de una moral basada en una justicia distributiva de responsabilidades compartidas resultado de la deliberación social. La violencia, generalmente ejercida desde el poder, no es totalmente ajena a varias prácticas cotidianas de las sociedades. La violencia requiere soportes culturales, políticos y sociales para cristalizar y, en este sentido, se nutre de varias fuentes: de la cultura de la negación del otro en los espacios públicos y privados, de la corrupción y la debilidad institucional, de la fragmentación de conflictos, del faccionalismo, de opciones económicas excluyentes, del sistemático crecimiento de las brechas sociales y la excesiva concentración de poder, de la exclusión y la pobreza, de la anticidadanía y de los vaivenes de la política internacional.

La violencia adquiere variadas formas, expresiones, rostros. Algunos son evidentes, otros más bien solapados y simbólicos. Los latinoamericanos los experimentaron todos, de múltiples maneras y en variados ámbitos históricos. El resultado es un profundo dolor y una arraigada cultura del miedo. En el presente capítulo se tratarán de retratar de manera muy general algunas ideas acerca de la necesidad de una lógica deliberativa que

promueva un cambio en las relaciones políticas y culturales entre los partidos, los actores socioculturales y el Estado. En la presente óptica, ninguna política económica o social nueva tendrá éxito sostenible si no es el resultado de una deliberación pluralista, social y culturalmente incluyente. Si tal lógica no se expande y al contrario las tendencias disgregadoras y violentas, ya presentes en gran medida en la vida cotidiana, se tornan hegemónicas, se repetirán y ampliarán las culturas de la violencia con saldos de penuria para el régimen democrático.

La situación actual de pérdida de peso político y de legitimidad de los partidos, de fragmentación de actores sociales históricos, de incremento de las acciones violentas en la vida cotidiana sobre todo en el ámbito urbano, de incapacidad de procesar ética e institucionalmente la agresión y la violencia por la existencia de arcanas culturas autoritarias, del narcotráfico asociado a una política meramente represiva impuesta por el gobierno de Estados Unidos, de los intereses crecientes de mafias internacionales en torno de la cocaína y la droga, y de ciertas tendencias y visiones ultracomunitaristas prevalecientes en varios actores, como muy especialmente la persistencia de una cultura política clientelar en la toma de decisiones, constituyen, sin lugar a dudas, importantes insumos para el desarrollo de escenarios de mayor violencia e incluso terrorismo que variará de caso en caso pero que, en gran medida, estará presente en prácticamente todos los países de la región. Por supuesto no deseamos plantear tesis absolutistas ni catastróficas o chantajistas del tipo “Pacto o Muerte”, sino tan solo subrayar algunos beneficios posibles y algunas consecuencias muy negativas respecto del hecho de embarcarse o no en una reforma política basada en la deliberación ciudadana. El texto explorará dos tipologías posibles: una, referente a la violencia, la fragmentación de conflictos y el terrorismo y, otra, referida al acuerdo intrasocietal y a la deliberación.

La violencia

En la perspectiva del presente capítulo es necesario distinguir *conflicto* de *violencia política* y *violencia política de terrorismo*¹. Por un lado, el conflicto y la crisis son parte constitutiva de la dinámica de cualquier sociedad

1. En este sentido, una óptica teórica puede resultar particularmente interesante, no tanto para comprender una posible situación futura, sino más bien para prevenir las consecuencias

democrática. Toda acción colectiva se ubica en una relación de conflicto y toda crisis es parte y resultado de la dinámica de conflictos que necesariamente suponen relaciones de poder, donde las identidades y orientaciones socioculturales de unos están constantemente en juego con otros actores o sistemas de actores. Los actores pueden tener comportamientos variados, algunas veces de cooperación, otras veces de conflicto, siendo siempre parte del juego constitutivo y reproductivo de las mismas sociedades. La cuestión se complica cuando se está en una relación de plena sumisión de unos por otros o cuando predomina una desagregación extrema y anómica de conflictos asociada con desestructuraciones estatales. La apatía o el fatalismo social son la expresión del vacío social creado por la ausencia de una política que produzca sentido.

Existen potencialmente en varios países de la región escenarios de caos sociopolítico asociado con fragmentación de conflictos, exclusión social creciente, incapacidad del Estado para resolver problemas, debilidad del sistema político para procesar demandas, deterioro de la representación política y de los mecanismos de integración simbólica, surgimiento de enfrentamientos directos Estado/sociedad, crisis económica y crisis de legitimidad de las instituciones del Estado y de la sociedad civil. Se trata, en definitiva, de sociedades e instituciones que son incapaces de procesar el cambio y recurren a conflictos autodestructivos como síntomas de sociedades que no alcanzan a perecer pero tampoco logran estructurarse².

Las sociedades, para desarrollarse, necesitan a la vez conflicto y cooperación. Una opción óptima de desarrollo supone conflicto procesado institucionalmente y cooperación, pues cada actor o grupo social puede buscar la maximización de sus demandas e intereses pero también puede buscar el logro de metas comunes sobre la base de la colaboración y el entendimiento. Cuando esto no ocurre, el campo propicio para satisfacer las de-

societales de no plasmarse lógicas deliberativas en los procesos económicos y políticos. En este marco, desearía reconocer que el libro de Michel Wieviorka *Sociétés et terrorisme* ha sido de especial inspiración.

2. En caso de no lograr una serie de políticas que sean el fruto de una deliberación donde participe la población, América Latina podría entrar, como se sugirió hace ya algún tiempo con Mario dos Santos, en uno de los escenarios de caos societal, con desagregación extrema y anómica de conflictos y desestructuración estatal. La tesis 17 presentada en *Hacia un nuevo orden estatal en América Latina. Veinte tesis sociopolíticas y un corolario* visualizaba asimismo una cierta latencia de este escenario en casi todos los casos de la región, aunque la misma se expresaría de manera particular en determinadas coyunturas y espacios parciales de la realidad nacional de cada uno de estos países (Calderón/Dos Santos 1991b, pp. 42-44).

mandas e intereses proviene del desarrollo de acciones violentas. En este marco, la violencia tiene un sentido social o se da en torno de la búsqueda de sentido. El terrorismo, como se verá más adelante, es un desprendimiento total de la sociedad y de las demandas del actor (Touraine 1973 y 1978).

Entre las variadas formas de violencia política es importante diferenciar la violencia *simbólica* de la *real*. Generalmente, la simbólica es una violencia implícita que complementa la real o la sustituye cuando ella ya no puede ser evidente. Un ejemplo especialmente importante es el de las políticas de ajuste estructural. Hubo violencia política en los programas de ajuste no sólo por los costos sociales que implicaron, sino porque promovieron conflictos políticos que incitaron a la violencia. Esto, obviamente, no supone negar la necesidad de programas de reestructuración económica de Estados deficientes, sino tan solo plantear que las formas políticas de aplicarlos provocaron descontento, frustración y expresión política en las calles. En realidad, mientras más rápida haya sido la transformación económica y más protegido haya sido el lazo y la matriz sociales de un país, menores habrán sido los costos de inserción en los procesos de globalización. Quizás por eso sean tan abominables esos ministros de Finanzas que constante, pública y groseramente se autocomparaban con carniceros o médicos que operan sin anestesia.

La violencia simbólica tiene la característica de actuar de manera subjetiva en las mentes de los individuos y hace que las personas y los grupos tiendan a asumir como propios los mandatos y valores de los que los dominan o excluyen, con lo que el sujeto ya no necesita control evidente: el esclavo es su propio gendarme. Estas formas de violencia se encuentran arraigadas en lo profundo de estructuras mentales y hacen que el sometimiento, el miedo y el sufrimiento sean percibidos como naturales. Ellas organizan la vida cotidiana de la gente. Los individuos y los grupos ya no construyen sus vidas; la imposición viene del exterior.

En este marco, el Estado es una de las instituciones que más concentra la posibilidad de la violencia simbólica legítima, pero también el mercado, especialmente el mercado y la industria culturales que inculcan la cultura del deseo muy a menudo asociada con el desarrollo de una violencia simbólica vinculada con frustraciones ocultas de la gente y sus culturas. Los signos y los símbolos de la violencia están instalados cotidianamente en los espacios públicos y en el corazón de la vida privada. La violencia simbólica es un rasgo central y cotidiano de la sociedad de la información (Poulantzas; Bourdieu 1994).

La acción violenta es comúnmente vista como puramente irracional, y sobre ella se ejerce una crítica moral, pero el análisis sociológico debe distinguir la acción violenta, que es general y variada, de la acción terrorista. En la acción terrorista pura no hay reconocimiento orgánico de las relaciones sociales ni políticas; además, ella produce una hiperconcentración de sentido de la acción, donde los actores son portadores de valores absolutos. Estos fenómenos reproducen al interior del actor una gran cohesión de valores y prácticas cerradas, percibiendo al otro en términos de enemigo y a la acción terrorista como un método. Allí, la cercanía a la muerte y el uso de las armas dan al actor violento una gran coherencia axiológica.

Pero ¿cómo nace una acción terrorista? ¿Cómo una demanda social se convierte en acción violenta? Parece ser que se parte de un sentido social real que se instala en conflictos verdaderos, pero que deriva en ideologías absolutas que pueden culminar en acciones violentas, fenómenos directamente dependientes de la fortaleza o debilidad de las instituciones, de los movimientos sociales y del dinamismo sociocultural de un determinado país. En este sentido, se podría perfectamente preguntar: ¿Por qué la descomposición de los movimientos de protesta en varios países de la región, especialmente de campesinos, podría llevar a la violencia? ¿Puede la coacción ejercida por las instituciones represivas nacionales e internacionales incidir en el crecimiento de una cadena de violencia? Las mafias del narcotráfico ¿podrán estar interesadas en tal dinamismo de manera abierta?

La justificación central de la expansión de la violencia radica en la predominancia de una lógica política de sustitución de los actores sociales y políticos, es decir, en la emergencia de un antiactor social. En este sentido, la posible expansión de la violencia sería una forma extrema de descomposición del movimiento social, pero también podría ser producto de una inducción externa.

Los principios de construcción de los movimientos se verían desdibujados o rotos. Así, el principio de identidad que define al actor deja de ser el elemento de referencia de la identidad social y es sustituido por una esencia societal, una figura abstracta o mítica, que hace que el protagonista se exprese sobre la base de principios más que como una fuerza social. Este fenómeno lleva a la negación del otro en su diferencia, traduciéndose esto en xenofobia “anti-Occidente”, racismo, etc. Así, el principio de oposición frente a un adversario social se transforma en un principio antagónico de destrucción del otro, que es percibido como una identidad total: el Estado, el extranjero, etc. El enemigo se objetiva y concreta.

Respecto al principio de totalidad, que implica la creación de un campo de historicidad en el cual se oponen movimientos sociales y acción dirigente, deja de ser un campo de referencia que alimenta proyectos históricos. Ya no se trata de dirigir y orientar la sociedad sino que ella llegue al “paraíso” imaginado, a utopías absolutas y mesiánicas, como aquellos mitos andinos que se integran de una manera pura. Todo o nada³. Sin embargo, también hay transformaciones en el seno de la producción societal. Así, si los movimientos sociales en su mutua interrelación introducen valores y prácticas socioculturales solidarias, que alimentan y valorizan la cotidianidad social y política, los antimovimientos tenderían al deterioro de la cotidianidad y a la imposición generalizada de una lógica inspirada en la violencia. Por ejemplo, un producto societal de las acciones violentas en el campo peruano en los tiempos de Sendero Luminoso fue el retraimiento comunitario, por lo demás, única forma de poder sobrevivir que tenían los comunarios del llamado Trapecio Andino del Perú (Degregori 1986 y 1992).

Así, en un antimovimiento social no existe referencia a una relación social, sino sólo a un sujeto que se transforma de adversario en enemigo que se objetiva. En este sentido, la noción de antimovimiento social es cercana a la de totalitarismo, de la cual se alimenta. Lefort sostiene que en el totalitarismo se oculta la noción de institución de lo social oponiéndose mecánicamente Estado y sociedad civil. El sindicato, el militante, el jefe, detentan el poder del saber; ellos controlan al campesino, al ingeniero, a la sociedad (Lefort 1981). Los antimovimientos sociales no son homogéneos ni entelequias preconfiguradas teleológicamente; pueden tener diversos orígenes y variados resultados. Algunos pueden radicalizarse hacia la violencia terrorista y otros hacia la secta; así, los Panteras Negras y el movimiento carismático de Martin Luther King fueron parte de un mismo fenómeno; los movimientos islámicos oscilarían entre un comunitarismo total y una gran violencia hacia el exterior, comunitarismo por lo demás reinventado a partir de una especial interpretación del Corán (Calderón/Hopenhayn/Ottone). Un antimovimiento social sería el lugar de producción del terrorismo, pero no todo antimovimiento social o acción violenta es sinónimo de terrorismo.

3. Tal fue el caso de Sendero Luminoso, cuya propuesta político-militar se ubicaba en una lógica de guerra que no admitía posiciones intermedias: o se estaba con ellos o contra ellos. Es interesante cómo uno de los ejes de Sendero fue precisamente convertirse en una vanguardia activa de lucha social que busca en lo político “volver al pasado” (Degregori 1992)

Vale la pena aquí introducir un breve comentario sobre los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. A nuestro entender, ellos dejaron en evidencia al menos tres problemas: 1) la debilidad de la economía de mercado para regular procesos políticos. Mientras el neoliberalismo refería todas las soluciones al mercado, estos actos muestran que se necesita una respuesta política y no puramente económica a las desigualdades y desequilibrios provocados por la completa liberalización de los mercados y a las inequidades de la economía global (Beck 2001); 2) la reemergencia, en el escenario político internacional, de un Estado en el que prevalece la racionalidad de la represión y de la violencia. El Estado norteamericano asume una lógica fundamentalmente de guerra, que no sólo se expresa en su política exterior sino también afecta la vida cotidiana en términos de seguridad ciudadana; y 3) la emergencia de una forma pura y absoluta de terrorismo. Así, mientras en el caso del Estado que se asume una lógica represiva reina Leviatán, en el caso del terrorismo lo hace Behemont⁴.

Sin embargo, es fundamental distinguir entre violencia terrorista y violencia reactiva o revolucionaria. La noción de violencia política es más compleja que la de violencia social y tiene relación con un conjunto de conductas políticas cuya particularidad es la de estar alimentadas por demandas sociales. En este contexto, parece pertinente poder diferenciar la acción revolucionaria del terrorismo de extrema izquierda y de extrema derecha. La acción revolucionaria, según Wieviorka, sería una combinación de violencia política, generada por la crisis del Estado, y acción social, que implica una unión del pueblo y la vanguardia, mientras que el terrorismo de extrema izquierda es la figura inversa, pues se separa de toda acción de masas para instalarse únicamente en el nivel político y sólo se vincula con la sociedad de manera voluntarista, artificial y estrictamente ideológica. Por otra parte, el terrorismo de extrema derecha se refiere antes que nada a una colectividad más corrientemente definida como una nación vapuleada por el exterior y amenazada por el interior que llama al orden y a la grandeza del país. Esta acción tiende a sustituir de una manera muy voluntarista a las elites desfallecientes incapaces de asegurar el desarrollo, o a políticos y militares impotentes frente al desorden interior o ante la

4. Para Hobbes, Leviatán representa un sistema político autoritario con vestigios de ley, mientras que Behemont representa un no Estado, un caos. Para un análisis de los orígenes del nazismo, v. Neumann.

escena internacional. A diferencia de los revolucionarios, los terroristas hablan poco de tomar el Estado (fines y medios se confunden), más bien se refieren a dar golpes al sistema y tienen una autoimagen de pureza fantástica; su noción del tiempo se vuelve absoluta, entendiendo a la violencia no como ofensiva sino como contraofensiva, y el presente continuo es ya el futuro: la muerte.

Todo movimiento social, ha afirmado Touraine, tiene un lado luminoso que lo hace portador de un proyecto histórico y que responde a la clase dirigente buscando alternativas para la sociedad, pero también tiene una cara oculta, defensiva, excluida más que dominada, alienada más que subordinada, encolerizada más que portadora de un proyecto⁵. El movimiento obrero, durante cierto tiempo, vivió fuertemente estos antagonismos entre una conciencia negociadora y otra corporativista, donde la violencia no estuvo ausente de la acción colectiva. Hobsbawn habla de luchas obreras violentas, de revueltas prepolíticas que se dieron antes que el movimiento obrero se organizara, pero también habla de la violencia de los bandidos. Se trata de eliminar toda preñición o prejuicio respecto de las diferentes formas de acción violenta y del desafío analítico de descubrir sin supuestos teleológicos las distintas racionalidades y alternativas en juego.

Posiblemente, uno de los parámetros más sugerentes para entender los distintos tipos de violencia en América Latina sea la mayor o menor fortaleza de los movimientos obreros y campesinos, su relación con el Estado, el sistema político y los procesos de desindustrialización y reconversión industrial, más aún hoy día cuando se vive un momento de inflexión de la acción colectiva. ¿Es posible comprender la acción de Sendero Luminoso sin tomar en cuenta la debilidad del movimiento obrero y popular en el Perú? O ¿se puede entender el comunitarismo de Villa el Salvador en Lima sin hacer referencia a los actores mencionados? O ¿pueden comprenderse los ciclos de la violencia estatal, la guerrilla y el terrorismo en la Argentina sin tomar en cuenta la inflexión de la acción colectiva? La moraleja parece ser que, allí donde se da una conciencia social producto de un sistema de

5. "Los movimientos societales, como los movimientos históricos y culturales, pueden darse vuelta y convertirse en antimovimientos sociales. Es lo que sucede cuando un actor social se identifica completamente con una apuesta cultural, p. ej., el progreso, y rechaza entonces a su adversario como enemigo, traidor o simplemente obstáculo que hay que eliminar. Se quiebra entonces lo que define un movimiento societal, es decir, el conflicto de actores por la gestión social de una apuesta cultural, conflicto que nunca se reduce del todo a los intereses de uno u otro, y el accionar que cuestionaba las grandes orientaciones de la sociedad se degrada en secta o movilización autoritaria" (Touraine 1996, p. 122).

actores sociales fuertes y sistemas políticos abiertos, no hay lugar para la emergencia de acciones violentas. Así, lo específico de un antimovimiento social es el “desenganche” del actor de una relación social de dominación en función de una distancia o ruptura con el sistema de acción histórica. Precisamente por todo esto existen condicionantes serios para la expansión de la violencia en América Latina⁶.

Es posible distinguir al menos tres caminos de acceso a la violencia y al terrorismo: la descomposición del sistema político asociada con una desagregación extrema de conflictos, la presencia de un Estado en crisis y el peso de los juegos de intereses del sistema internacional. La presencia de un sistema político en descomposición crea condiciones favorables para la fragmentación de conflictos y para el desarrollo de antimovimientos sociales. Esto se expresa fundamentalmente en la crisis o en la debilidad de los mecanismos de representación y participación política. “El sistema político –afirma Wiewiorka– puede ser definido por su autonomía en la cual los actores producen estrategias, alianzas, calculan y pesan decisiones y acceden o no al gobierno.” Pero ¿qué pasa cuando este sistema no tiene capacidad de reproducirse, de representar los intereses sociales en juego, y la representación misma es cuestionada por la sociedad?, ¿o cuando la sociedad se ha vuelto tan compleja que la política pasa a ser un subsistema que funciona ilegítimamente? Estos fenómenos crean también condiciones para acciones violentas y para la emergencia de antimovimientos sociales, hechos éstos directamente relacionados con rupturas y fraccionamientos sociopolíticos intensos y con procesos de fragmentación y descomposición de los actores sociales. La crisis de la política se puede pagar con penuria democrática.

La inestabilidad política como consecuencia del desgobierno puede llegar a producir condiciones favorables para la aparición de antimovimientos sociales y de acciones violentas y terroristas, pero éstas se deben fundamentalmente a la debilidad de la intermediación del sistema político

6. En buena parte las guerrillas en América Latina se han caracterizado por autoconsiderarse sujetos del cambio que estarían en la cima de los movimientos y por lo tanto pretenderían monopolizar el Estado y la política. Su lucha estuvo centrada en contra del Estado y del sistema de dominación a través de la acción violenta. La lógica de la guerra y la violencia como instrumento político en el continente, así fuera por los ideales más nobles y revolucionarios, han generado una cadena de violencia que penetra en las relaciones más cotidianas y gesta un poder destructivo que no beneficia a nadie. Como dijo Ravaioli (p. 179), no se pueden resolver los problemas de la vida con la muerte. Sólo el respeto al otro y a sus derechos humanos permitirá salir de una cultura de la autodestrucción (Calderón 1995, pp. 78-82).

entre la sociedad y el Estado. El Estado puede ser entendido no sólo como una instancia de unidad de la sociedad monopolizadora de la coerción física y simbólica legítima, sino también como un espacio a la vez de comunicación y control social y como un actor de cambio. El Estado-nación se vincula de manera diversa con la globalización y participa en el juego político internacional como un actor más. El modo de intervención del Estado en su sociedad y en el ámbito internacional es una condición clave para la emergencia de la violencia. Cuando aquél es débil o corrupto y organiza su dominio mediante la coacción, crea condiciones para el surgimiento de acciones violentas; pero una situación de este tipo sólo se puede entender tomando en cuenta las articulaciones que establece con los actores políticos y sociales. Asimismo, la descomposición estatal también crea condiciones para la emergencia de la violencia. Así, el Estado fija las condiciones para el desarrollo o no de la violencia; sin embargo, aunque se apoya en ellas, no son sus únicas fuentes. Por su parte, el terrorismo se caracteriza por cuestionar al Estado y a sus modos de intervención; pero cabe destacar que siempre el fenómeno de surgimiento de acciones violentas está relacionado con la descomposición de las relaciones sociales. En contextos de descomposición y autoritarismo cobra fuerza el terrorismo de Estado, convirtiéndose éste en un antiactor social.

La agudización de los conflictos en el sistema internacional condiciona la emergencia de la violencia y de acciones terroristas, pero se hace necesario distinguir el juego del terrorismo internacional de la trama del sistema internacional. Hay muchas interpretaciones al respecto; p. ej., Raymond Aron (1972) distingue entre “edad nuclear” y “edad terrorista”, ambas asociadas a través de la noción de “paz belicosa”. Según este pensamiento, el desarrollo nuclear impediría la realización de conflictos entre las grandes potencias –las cuales se opondrían a través de terceros Estados o recurriendo al terrorismo– y, por otro lado, alimentaría el desarrollo de acciones terroristas. Al mismo tiempo, los Estados totalitarios basados en el terror interno pueden prolongar su acción en la escena exterior⁷.

7. El caso de América Latina en esta experiencia es dramático. Las dictaduras de Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil establecieron implícitamente, a través del llamado Plan Cóndor, un programa de intercambio de información y prisioneros que permitía el ejercicio de la violencia y la violación de los derechos humanos más allá de cualquier frontera. Se crearon las condiciones para ejercer un terrorismo internacional de Estado que podía actuar en cualquier lugar de la región, e incluso, en algunas ocasiones, tenía capacidad ejecutiva internacional.

Asimismo, la violencia puede ser inducida por mafias internacionales o por “Estados internacionales paralelos”, como es el caso de la mafia de la cocaína; también por políticas conspirativas y represivas por parte de agencias internacionalizadas de lucha contra el narcotráfico. En realidad, en la medida en que estas instituciones se autonomizan del poder civil tienden a reproducir, conjuntamente con las lógicas mafiosas, un círculo vicioso de violencia y terror. Es decir, se trataría del predominio de una lógica guerrera entre los actores terroristas y los represores que tiende a multiplicar y complejizar este tipo de acciones.

No obstante, más allá del reconocimiento crítico de la presencia de la política conspirativa en la escena política nacional e internacional, es importante distinguir la vinculación entre la lógica de la coacción y la violencia en el terreno internacional y la descomposición de las relaciones sociales que la puede alimentar. Así, es importante analizar la violencia en el contexto de las sociedades en las cuales surge, más que en relación con otros regímenes; pero muy especialmente es necesario el análisis de los protagonistas concretos de la violencia en un contexto dado, considerando que la acción internacional interviene adicionalmente sobre cierta situación interna.

En síntesis, la creación de acciones terroristas y/o violentas es el resultado de un conjunto complejo de relaciones y comportamientos sociales que tienen como eje central la crisis de los actores sociales y el desarrollo de antimovimientos. Para que se de la acción terrorista se debe lograr lo que Wieviorka llama “momento de inversión del antimovimiento social a la violencia y al terrorismo”, referido al momento en que se pierde el sentido de la acción y paradójicamente se pasa a actuar en nombre del movimiento cuando en realidad hay un alejamiento de él, lo que de suyo implica un constante y acelerado proceso de afirmación fundamentalista y de desarrollo de los aspectos ocultos de los movimientos sociales; es cuando el grupo se apodera de la totalización utópica. Psicológicamente esto estaría relacionado con el fenómeno de disonancia cognitiva que, según Festinger / Aronson, se refiere al proceso de preparación de una decisión con base en la existencia simultánea de elementos de conocimiento opuestos, lo que genera una contradicción que se resuelve en una decisión que elimina la disonancia. Por eso una acción violenta irracional requiere justificación racional.

Las características de la violencia son distintas y es necesario distinguir al menos dos tipos: aquel basado en la percepción de la acción violenta como un método al servicio de la lucha de una colectividad concreta que se reconoce en ella y que ve en la acción un instrumento coyuntural en pos del

logro de fines y acciones, y aquel basado en la percepción de la acción violenta, más que como método, como una lógica de acción absoluta, donde los medios y los fines se confunden, al tiempo que desaparece una base social legitimadora de referencia que sólo existe en la cabeza del actor. En el fondo, los terroristas luchan contra fantasmas. En gran medida, la acción terrorista se asemeja al fenómeno totalitario: ambos tienen una misma lógica para visualizar el Estado y la sociedad, ambos rechazan la idea de un espacio interno de deliberación y debate abierto, de representación del poder como un lugar de coexistencia, conflictiva o no, pero inapropiable, es decir, un espacio público democrático en el que se expresen constantemente los actores colectivos, un espacio como el que se ha tratado de definir a lo largo del libro.

La deliberación como gestión progresiva del cambio

Resulta difícil imaginar una gestión progresiva del cambio sin acuerdo intrasocietal. Por una parte, el Estado tiene la necesidad de compartir responsabilidades en cuanto a la fijación de políticas y, por otra, el proceso democrático reabre el debate sobre qué contenido último va a tener la democracia, es decir, sobre el grado de justicia social que aspira lograr y sobre cuánto se puede avanzar en las dos dimensiones que la califican: la de la libertad y la de su cualidad. La primera se refiere al desarrollo de capacidades individuales y colectivas en una sociedad determinada, mientras que la segunda, que supone acuerdo e intervención de los actores sociales organizados en la fijación de políticas, se refiere a la necesidad y capacidad de una sociedad de ampliar los canales de participación. Sin incremento de las capacidades políticas y sin ampliación de los canales de participación política no es posible la deliberación.

Junto con las expectativas de una democracia que avance progresivamente, se plantea casi inmediatamente el problema de los alcances de la deliberación, que implica una construcción de consenso sobre metas básicas del orden societal que no están aseguradas por la mera vigencia del orden democrático o económico. Ahora bien, ¿cuáles son las modalidades del quehacer político que permiten ese consenso y, a partir de él, la acumulación de poder y la coherencia necesarias para transitar ese camino? La privatización de las decisiones por vía de la imposición del proyecto neoliberal, donde predomina sólo el cálculo racional formal de ventajas

económicas para los actores individuales o colectivos, como se ha argumentado en capítulos anteriores, fragmenta la trama social, incrementa la incertidumbre y la desigualdad y condiciona la violencia. En el otro extremo, en los distintos países de la región, no existe por parte de ninguna de las fuerzas sociales y políticas capacidad para imponer hegemónicamente un proyecto de desarrollo, sea cual fuere éste y conociendo los costos de la coerción bajo cualquier signo político.

Ante este panorama, cabe insistir en una comprensión de la política como un sistema de expectativas y de reconocimientos recíprocos, donde los procedimientos aparecen no como meramente formales, sino como formas comunicativas que establecen normas de reciprocidad. La disponibilidad de los actores sociales organizados para concurrir a la elaboración de una política de gobierno de la economía que regule el comportamiento de todos los actores sociales tiene que ver con esta modalidad. Y eso sólo se puede concebir intensificando el poder constructivo de la política, el constructivismo simbólico de la política deliberativa, respetuosa pero también generadora de nuevas identidades sociales.

Generalmente, en la doctrina contractual se supone que los actores que entran en un acuerdo son preconstituidos, o sea son actores que no juegan su identidad en la deliberación; pero, en realidad, si la modalidad de hacer política es la de un intercambio con reconocimientos recíprocos, la deliberación es la ocasión para redefinir identidades sociales y políticas de unos respecto de otros. La deliberación implica interacción y reconocimiento del otro, pero un reconocimiento que conlleva comprender la libertad y la identidad del otro, su subjetividad. La política, en este sentido, podrá ser entendida como el arte de lo mejor posible, es decir, tendría que hacerse cargo de la elaboración de esa pluralidad.

La necesidad de un compromiso nacional inclusivo, dado un cierto grado de heterogeneidad social, cultural, regional y política existente en la mayoría de los países de la región, reclama una comprensión de este tipo. La cuestión nacional, como ya se insistió, no puede enfrentarse exitosamente sino como producto de esa pluralidad. En ese sentido, el reconocimiento igualitario de las identidades socioculturales, especialmente étnicas y políticas en sus diferencias, constituye un requisito básico para que la sociedad se exprese democráticamente. Los propios actores sociales, incluidos el Estado y los partidos, tienen que generar la dinámica de ese intercambio. El problema tal vez consista en que la lógica de esa participación tiene al menos por ahora un carácter fragmentado, particularista en términos reales y muy a menudo

faccioso o corporativo, aunque en términos formales unos y otros defiendan sistemas y valores universalistas. Se da entonces una dinámica de acción social de unos sectores sobre otros (en la búsqueda de hegemonía), escapándose la posibilidad de construir un consenso intrasocietal respecto de metas básicas de funcionamiento de la sociedad o de un proyecto compartido por las mayorías. No son ajenas a estas prácticas las arcanas culturas patrimonialistas y clientelares predominantes en la región.

En el presente texto no se han tratado los contenidos de estos proyectos nacionales en términos de modelos económicos concretos y de opciones societales plausibles. Más bien se ha argumentado algo subyacente, a saber, la necesidad de cambio en la forma de las relaciones políticas, que en su expresión actual parecen tender a un sistema de opciones finales, donde el otro es un enemigo al que se derrota, destruye o compra, o con el cual se establece una relación instrumental. En realidad, si no se terminan de superar estas relaciones también se está condicionando la expansión de la violencia. En este ciclo histórico, más allá de notables expresiones pactistas en el plano partidario, las formas de hacer política han tenido que ver más con el particularismo, la manipulación, el maximalismo, el clientelismo o el regateo mercantil, que fueron afines con nuestra sociedad. Empero, en ella las relaciones sociales no están plenamente constituidas; a diferencia del paradigma europeo o estadounidense, no se trata de una sociedad tan preestablecida que permite regulaciones repitiendo mecanismos y formas de comportamiento. En ese sentido, es importante que una discusión sobre la política y su función social permita pensar posibilidades diferentes de “hacer política” en estos países.

Para los intereses del presente capítulo, esta nueva modalidad tendría al menos tres dimensiones relevantes: en primer lugar, la visión del compromiso nacional como un proceso de intercambio subjetivo entre actores socioculturales y políticos capaz de movilizar sus identidades; en segundo lugar, la exigencia de relegar o reconvenir los caminos rupturistas o maximalistas de transformación social, y, en tercer lugar, el énfasis en los contenidos éticos de la democracia (Calderón/Dos Santos 1987b). Lo primero está relacionado con una tesis sociológica, a saber, que las identidades de los sujetos sociales se construyen y reconstruyen desde los otros, en relación con otros y, fundamental pero no exclusivamente, en el contacto cara a cara. Si se estudia la interrelación entre un movimiento campesino y un movimiento obrero, hay cierta experiencia en cuanto a introducir problemas campesinos en el mundo del pensamiento y la acción obrera y

viceversa. Hay posibilidades de relaciones básicas de intercomunicación entre ellos, fuera de las relaciones de dominación a las cuales pueden estar sometidos; pero tal vez esa interrelación por sí y en sí misma, a pesar de ser central, sea insuficiente ante la dinámica y las características tan heterogéneas de la sociedad. Y un nuevo compromiso histórico no es simplemente un espacio de reafirmación de los actores sociales, sino un espacio de reconstrucción de las metas e intereses de los sujetos⁸.

Lo segundo se vincula al rechazo de cualquier forma de autoritarismo, sea de izquierda o de derecha, comunitarista o elitista; por ello se impone resolver bien el problema de la representación y de la participación, de las mediaciones entre sociedad y Estado. Esto lleva a repensar los frustrados intentos de establecer sistemas hegemónicos de una clase sobre el resto de las clases (sea ésta el proletariado o la burguesía), de una región sobre el resto de las regiones o de ciertas elites estatales y líderes mesiánicos sobre partidos y fuerzas sociales, y, en definitiva, a reconsiderar el campo popular como un problema de articulación.

Lo tercero se relaciona con una preocupación por la institucionalidad, por la instauración de reglas del juego político que no determinen como única posibilidad de intercambio entre los sujetos políticos y sociales una oposición de fines últimos: el reconocimiento del otro como alguien legítimo reclama la presencia o la persistencia de valores y de normas éticas en la democracia, pero también reclama una crítica de la experiencia histórica, que por lo demás ha sido lo que se ha tratado de hacer a lo largo del libro.

Por otra parte, y pese a lo dicho, también sería necesario valorar la negociación como espacio de regateo o de intercambio de intereses, práctica

8. Como bien indica Touraine, para la vida pública y la existencia de lo social es necesaria la constitución de sujetos que sean capaces de administrar su propia existencia, instituciones y formas de organización que permitan la conformación de una sociedad de sujetos. Esta comunicación intercultural de sujetos es la que permite formar una sociedad multicultural y, por tanto, la posibilidad de reconocer a los demás como diferentes. En esta discusión Touraine critica tanto a las ideologías y políticas comunitaristas como a la ideología neoliberal —que disuelve la sociedad en el mercado—, y coloca “en el centro del análisis y la acción no la sociedad, sus necesidades, sus funciones y su conciencia, sino el sujeto personal, su resistencia, sus esperanzas y sus fracasos”. Concluye que no hay “... otra respuesta que la de la asociación de la democracia política y la diversidad cultural fundadas en la libertad del Sujeto. No hay sociedad multicultural posible sin el recurso a un principio universalista que permita la comunicación entre individuos y grupos social y culturalmente diferentes. Pero tampoco la hay si ese principio universalista gobierna una concepción de la organización social y la vida personal considerada normal y superior a las demás. El llamamiento a la libre construcción de la vida personal es el único principio universalista que no impone ninguna forma de organización social y prácticas culturales” (Touraine 1996, p. 174).

no ajena a la realidad latinoamericana. En la medida en que toda organización social es multifuncional, la especialización en objetivos exclusivamente económicos no existe en ninguna de ellas, combinándose siempre en el accionar intereses y propuestas de orden social, o sea reivindicaciones económicas y objetivos políticos. Intereses y pasiones –en la terminología de Hirschman (1986)– son constitutivos de la realidad social.

Si es cierto que todo proyecto de desarrollo requiere un núcleo de intercambio económico, tecnológico, productivo y sociocultural autónomo, se deben valorar especialmente los procesos de integración social simbólica de la sociedad como base de otros procesos de integración. Retomando lo antes dicho, tanto las negociaciones económicas como las políticas –entendidas ambas como manifestaciones de intercambio político– pueden ser ocasión de integración simbólica. Esto no equivale, evidentemente, ni a la anulación de los conflictos ni a la disolución de las identidades sociales y políticas; podría implicar, sí, reconstitución de esas identidades.

La superación de las trabas al desarrollo propias de la situación de dependencia y de atraso tiene como límite una acción progresiva en los planos económico y político, y esa política no resulta accesible sin reconstitución de identidades y de comportamientos. La acumulación de poder social y político para transitar con éxito un camino de consolidación y profundización de la democracia requiere asumir de diferente manera responsabilidades sociales y nacionales de los distintos actores, pues con ello tiene que ver su capacidad de articulación y desarrollo.

Quizá el problema de la deliberación en este contexto, no sea sino el de lograr, a partir de agrupamientos fundados en intereses, que los actores sociales y políticos, sobre todo estos últimos, impulsen –en un proceso de intercambio político– transformaciones en el plano de la institucionalidad democrática, reinterpretando en primer lugar la naturaleza de la legitimidad para incidir inmediatamente en la regulación de la economía. Aquí, finalmente, se está abogando por una cultura pluralista como principal garantía de una cultura de paz con desarrollo.

Los escenarios que se acaban de narrar no son más que “tipos ideales” de comportamiento posible que jamás corresponderán directamente con la realidad social, pero permiten dilucidar una línea imaginaria en donde los variados países podrían situarse. Ojalá que la región esté más cerca de la segunda figura. En gran medida esto depende de la capacidad política de la sociedad y, sobre todo, de su inteligencia para desprenderse de una cultura conspirativa y negadora del opositor, especialmente en las elites y

en la “clase política”, en buena parte de los intelectuales y en la misma sociedad civil. La deliberación, en este sentido, no sólo sería un instrumento de negociación sino un genuino ejercicio de comprensión de la memoria y de la libertad del otro.

